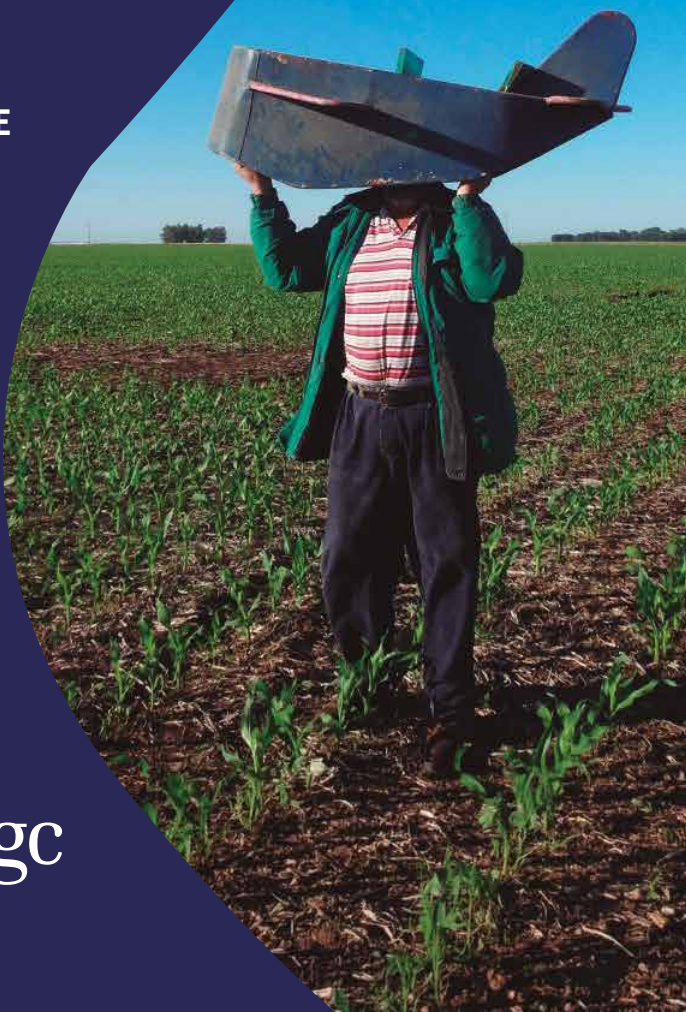


imagina rural.

Sostenibilidad biocultural para territorios rurales

PABLO **DÍAZ MEEKS**
FABIOLA **LEIVA CAÑETE**
Compiladores



HABITACIONES
COMUNES



ImaginaRURAL

Sostenibilidad biocultural para territorios rurales

PABLO DÍAZ MEEKS
FABIOLA LEIVA CAÑETE
COMPILADORES

PRÓLOGO:
LUCINA JIMÉNEZ

AUTORES:

LORENA ÁLVAREZ CHÁVEZ, KAREN ÁLVAREZ VILLEDA, MARTA ALBORNOZ ALBORNOZ,
BENITO BURGOS BARRANTES, GEMMA CARBÓ RIBUGENT,
GONZALO CÁRDENAS ALMONACID, FRANCESCA CID VILLABLANCA,
PABLO DÍAZ MEEKS, LUJÁN I AEL DOMÍNGUEZ,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ BALBOA, VALENTINA FUENTES CERDA,
EMILIANO GONZÁLEZ OVALLE, MARÍA GRIÑO COLOM, DIANA PAOLA GUZMÁN MÉNDEZ,
CRISTIAN HEINSEN, FABIOLA LEIVA CAÑETE, MARIO HERNÁN MEJÍA,
DIANA CAROLINA MONTOYA HENAO, HÉCTOR MOYA ROJAS, IÑIGO OSES MAESTRO,
GERARDO DANIEL PADILLA GONZÁLEZ, MARIANA PFENNIGER,
LUCY QUIOTO, ANA RAGGIO, DANNY RAMÍREZ ORELLANA, VALERIA RÉ,
SERGIO TRABUCCO ZERÁN, ANDRÉS UGAZ CRUZ, SANDRA ULLOA MENSING,
CARLOS VILLASEÑOR ANAYA, RODRIGO YÁÑEZ ROJAS,
CLARA MÓNICA ZAPATA JARAMILLO

**HABITACIONES
COMUNES**



Díaz Meeks, Pablo

ImaginaRural : sostenibilidad biocultural para territorios rurales / Pablo Díaz Meeks ; Fabiola Leiva Cañete ; Prólogo de Lucina Jiménez. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : RGC Libros, 2026.

Libro digital, PDF - (Cuadernos de investigación ; 10)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-631-6776-16-7

1. Estudios Culturales. I. Leiva Cañete, Fabiola II. Jiménez, Lucina, prolog. III. Título. CDD 300

DOI: 10.64890/6



"Proyecto financiado por la convocatoria pública 2025 para el fomento a la interdisciplinariedad en el ecosistema creativo, en el marco del programa de fomento y desarrollo de ecosistemas creativos"

Equipo RGC:

Nicolás Sticotti,

Emiliano Fuentes Firmani y

Leandro Vovchuk

Foto de tapa: Leonardo Remor, Programa de Residencia Comunitaria, Lincoln, Argentina, 2016.

Diseño de interior y tapa: Ana Uranga B. | melasa diseño

Corrección: Sebastián Spano

1° edición, 2026

www.rgcediciones.com.ar

© 2026 RGC - Redes de Gestión Cultural

Todos los derechos libres de ser compartidos.



Índice

PRÓLOGO

Ruralidades, memorias, saberes y biopolítica

Lucina Jiménez (México)7

INTRODUCCIÓN

Después de todo, interrogarnos es lo más parecido

a imaginar futuros deseables.....12

Pablo Díaz Meeks y Fabiola Leiva Cañete

Habitaciones Comunes (Chile)

REPENSAR LAS RURALIDADES

20

Conceptualizando el espacio de acción de la nueva ruralidad:

institucionalidad formal, informalidad e ilegalidad.....21

Rodrigo Yáñez Rojas y Valentina Fuentes Cerda (Chile)

Nuevas ruralidades: repensar la condición de humanidad41

Gemma Carbó Ribugent (España)

Gestión cultural y territorios rurales: enfoque biocultural frente

a las desigualdades55

Fabiola Leiva Cañete (Chile)

Hábitats y contextos geográficos rurales: retos y oportunidades

culturales para el desarrollo70

Clara Mónica Zapata Jaramillo (Colombia)

Cultura y ruralidades contemporáneas. Una aproximación

desde el Programa Cultura y Ruralidades del Ministerio

de Cultura de España.....85

Benito Burgos Barrantes (España)

CULTURA, DERECHOS Y GOBERNANZA TERRITORIAL 106

Diversidad y derechos culturales en la política cultural local: bases para el ejercicio de la libertad cultural de las comunidades y de las personas.....107

Carlos Villaseñor Anaya (México)

Ruralidades en Bogotá D.C.,

Colombia. Transformación en cultura de paz 122

Diana Paola Guzmán Méndez y Diana Carolina Montoya Henao -
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,
Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia)

Educación artística, desarrollo territorial y cooperación cultural: el caso de Cantarranas.....134

Mario Hernán Mejía y Lucy Quioto (Honduras)

De Jalisco adentro: una experiencia de política cultural para imaginar futuros rurales posibles 150

Gerardo Daniel Padilla González (México)

SABERES, PATRIMONIO Y DIVERSIDAD BIOCULTURAL 168

Núcleos de Aprendizaje Participativo: diálogo de saberes y transición agroecológica en territorios rurales de la Región de Valparaíso..... 169

Francesca Cid Villablanca, Emiliano González Ovalle, Danny Ramírez Orellana, Héctor Moya Rojas y Marta Albornoz Albornoz - Centro Regional Ceres, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)

Curanto en hoyo: hacia una estética del imaginario rural..... 185

Gonzalo Cárdenas Almonacid (Chile)

El testigo Panadero: del afecto y de la vulnerabilidad como formas de entender a la panadería ayacuchana..... 207

Andrés Ugaz Cruz (Perú)

Tlaxcala, una tierra viva: talavera de San Pablo del Monte y alfombras y tapetes de Huamantla	214
Karen Álvarez Villeda (México)	

CREATIVIDAD TERRITORIAL Y EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA	228
--	------------

Sintaxis de la periferia: el atributo rural en distritos creativos urbanos para la regeneración territorial con identidad	229
María Teresa Fernández Balboa (Chile)	

Innovar desde adentro: reflexiones en base a experiencias apoyadas por el Programa Innova en el ámbito rural en Navarra, España	250
Iñigo Oses Maestro, María Griñó Colom y Mariana Pfenniger Equipo Innova (España)	

Para subir alto, hundir los pies en el barro. La economía de la conservación y el aprendizaje compartido junto a comunidades andinas	267
Cristian Heinsen - Escuela Sarañani!, Fundación Altiplano (Chile)	

Bolivia Rural: bitácora de experiencias en internacionalización y cooperación cultural desde el sur de Chile	278
Sergio Trabucco Zerán (Chile)	

Desplazamientos, asimetrías y persistencias: el arte colaborativo como activador del imaginario rural	284
Valeria Ré, Ana Raggio y Luján lael Domínguez (Argentina)	

Donde todavía hablan los vientos (o donde recordaron cómo escucharlos)	302
Sandra Ulloa Mensing y Lorena Álvarez Chávez - LiquenLab (Chile)	

AUTORES	308
----------------------	-----

PRÓLOGO

Ruralidades, memorias, saberes y biopolítica

Lucina Jiménez

Nunca como ahora había sido tan importante voltear la mirada hacia nuestras ruralidades y repensar las relaciones entre lo local y lo global en los territorios, lo mismo en América Latina que en Europa, Asia o África. La reflexión, urgente a nivel global, debe, necesita, descansar en la voz, la memoria, las experiencias, las reflexiones, las lenguas y las miradas de quienes no sólo son portadores de sabidurías ancestrales profundamente contemporáneas, sino creadores y guardianes de muchas cosmovisiones que no han sucumbido a los colonialismos o los procesos de expropiación de todo tipo que han sorteado durante siglos.

Hoy estamos obligadas a reconocer los dilemas que viven las comunidades rurales e indígenas, ante la sobre explotación de sus recursos naturales, ante el deterioro de la biodiversidad y la crisis derivada del calentamiento global que pone en riesgo el planeta. Pero también es un tiempo magnífico para escuchar la palabra de quienes son protagonistas de filosofías, experiencias y sueños que orientan los sentipensares de las actuales y nuevas generaciones en las comunidades rurales.

Nunca como ahora fue tan necesario el cuestionamiento de las políticas económicas, culturales y sociales que miran a las comunidades rurales

con ojos de nostalgia, tradicionalidad o pobreza, porque el resurgimiento de nuevos liderazgos colectivos de muchos pueblos por aquí y por allá, cuestionan las miradas centralizadoras, homogéneas, eurocéntricas y elitistas que predominaron durante el siglo XX y parte del XXI.

Cuando las ciudades se volvieron hormiguero de tan pobladas, parecía natural que campesinos y productores agrícolas abandonaran las tierras en busca de un “mejor futuro”, porque se dio por sentado que las ciudades constituían el tránsito natural de la migración, casi como destino evolutivo del “progreso”. Lejos estábamos de concebir que la suerte de las ciudades, de las grandes, las pequeñas y las medianas depende de la vitalidad de las ruralidades contemporáneas o que vivimos en una interdependencia donde se han puesto en crisis los modos de pensar, entender y vivir la noción de “desarrollo”. Ello incluye también el cuestionamiento de las miradas antropocéntricas que no permiten entender la interconexión entre biodiversidad, bioculturalidad y biopolítica, en un sentido más amplio.

Este libro, *ImaginaRURAL. Sostenibilidad biocultural para territorios rurales*, reúne un conjunto de textos que reflexionan en múltiples direcciones, pero unidos por el interés de ir más allá de las visiones convencionales de tipo sociológico, antropológico o económico que suele colocar a las comunidades rurales como muestras del pasado o como sujetos de políticas asistencialistas y/o paternalistas.

Especialistas de España, México, Colombia, Honduras, Chile, Perú y Argentina reflexionan sobre experiencias comunitarias y de política pública, de cooperación internacional que contribuyen a develar nuevas miradas en torno a los territorios y las comunidades rurales que las habitan.

Exploran, en cambio, perspectivas que colocan los enfoques de ecosistemas culturales y bioculturales como herramientas de análisis. Estas permiten acercarse más a las relaciones asimétricas de interdependencia que existen en diversos territorios que fueron, en su momento, espacios de despojo, desplazamiento y apropiación. Asimismo, rescatan las experiencias comunitarias que ponen de relieve complejos procesos de resignificación y empoderamiento de las memorias, los saberes y los conocimientos. Dichos procesos son protagonizados por diversas comunidades que no sólo se han mantenido vivas y en transformación en esos espacios a pesar de la migración, sino que además han transitado hacia diversos posicionamientos políticos y sociales de carácter simbólico y biopolítico, cuestionando el sentido y la viabilidad de la vida misma.

El libro, fruto de diversas conversaciones y experiencias, abre una reflexión a la perspectiva de la bioculturalidad, un concepto todavía no suficientemente asentado, pero con el cual hemos tomado postura en México respecto a que no hay ejercicio de los derechos culturales sin un enfoque territorial, a que el territorio es producido históricamente por culturas vivas poseedoras de saberes, conocimientos, memorias, tecnologías y lenguas que resguardan, preservan y transmiten hacia las actuales y las nuevas generaciones.

La Dirección General de Formación y Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, de nueva creación, la cual encabezo, ha asumido por primera vez en la historia cultural de un país megadiverso una postura clara: promover la justicia epistémica, colocando en condiciones de igualdad los saberes académicos que se producen en las universidades, con los que se construyen de generación en

generación en los ámbitos comunitarios. Colocar el tema de la gestión de los recursos bioculturales en el territorio es fruto de la convicción de que los derechos culturales solo tienen sentido a partir de un enfoque territorial, y de que los valores y vigencias de las culturas locales, rurales, comunitarias, indígenas y afromexicanas encierran el debate más profundo en términos de democracia cultural.

Hay preguntas se abren en este camino ¿Cómo transitar del reconocimiento del valor de las memorias y saberes tradicionales a la gestión sostenible de los recursos bioculturales propios de cada pueblo rural, indígena o afrodescendiente en el campo o en la ciudad? ¿cómo hacerlo aprovechando el cambio tecnológico y la presencia de inteligencia artificial que hoy vivimos? ¿Cómo pueden los enfoques públicos que se promueven hacia los saberes y la producción artesanal, los turismos rurales o de montaña, las autonomías alimentarias y la revitalización de las medicinas ancestrales ser capaces de enfrentar las tendencias mercenarias de la expropiación capitalista y la sobre explotación de los recursos naturales?

Vivimos tiempos de policrisis donde empezamos a encontrar alternativas de futuro, regresando a mirar con nuevos lentes epistémicos y políticos las memorias, los saberes y las manifestaciones de las culturas y las comunidades rurales, aún en medio de sus propias contradicciones, no exentas del influjo del capital, el narcotráfico y las violencias. Aún es necesario relacionar la gestión de la bioculturalidad con el tema de los cuidados en los que se sustenta la vida cotidiana y los enfoques de género que necesariamente pueden poner en tensión ciertos usos y costumbres.

Tarde o temprano, los mundos académicos y de las políticas culturales terminarán por reconocer que las comunidades rurales e indígenas

han creado sus propios liderazgos, sus propios intelectuales, curadores y gestores culturales, a quienes conviene escuchar.

Nunca como ahora se necesitan diálogos entre iguales, a propósito de los importantes temas que se abordan en este libro, el cual está llamado a convertirse en un referente fundamental para impulsar estas y otras preocupaciones vigentes.

Mientras tanto, aquí en medio de la región de la Huasteca potosina, en México, una de las más ricas por su biodiversidad, y al mismo tiempo más amenazadas por la minería, me dispongo a escuchar las conversaciones que sostienen las personas que ejercen la producción agrícola, musical, la danza, el teatro, el patrimonio y las lenguas originarias, en torno a cómo revitalizar el patrimonio cultural del que son creadores y portadores, para poder refundar su programa cultural. Estamos aquí, en medio de la sierra, empezando a caminar en nuevas direcciones, con liderazgos comunitarios más sólidos y al mismo tiempo con retos más grandes.

Junio de 2026, México.

INTRODUCCIÓN

Después de todo, interrogarnos es lo más parecido a imaginar futuros deseables

Pablo Díaz Meeks y Fabiola Leiva Cañete

HABITACIONES COMUNES

El proyecto ImaginaRURAL, que constituye el marco de esta publicación, es una iniciativa largamente incubada. La atención por la ruralidad, sus dinámicas, conflictos, continuidades, desafíos y oportunidades tiene raíces que podemos rastrear en nuestra trayectoria laboral, participando por ejemplo en la gestión e implementación de políticas públicas destinadas a visibilizar y mejorar las condiciones del oficio de la artesanía desde el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, o siendo parte del equipo del Programa Desarrollo Territorial con Identidad Cultural (DT-IC), iniciativa impulsada desde el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), cuyo objetivo era colaborar con gobiernos nacionales y subnacionales del continente en el diseño de estrategias de desarrollo territorial sustentadas en el patrimonio biocultural de las comunidades rurales, campesinas e indígenas. No obstante, hay también otro origen y otras explicaciones para este proyecto, que tal vez haya que buscarlas en la memoria afectiva y familiar que nos conecta con las historias de abuelas y bisabuelas campesinas, historias que nos cuentan

de saberes, tradiciones, paisajes y migraciones, una experiencia cercana que puede hacerse extensiva también probablemente a casi todos lxs orgullosxs y a veces amnésicxs urbanitas.

ImaginaRURAL busca diseñar y activar una plataforma de reflexión, diálogo y diseño de futuros rurales sostenibles, así reza su objetivo declarado. Frente a narrativas que bloquean nuestra imaginación y nos defuturizan sumiéndonos en la impotencia (Escobar, Osterweil y Sharma, 2024), intentaremos abrir espacios y entramarnos con los que ya existen para discutir todo lo que puede ofrecer la memoria y la creatividad de territorios y comunidades que participan de dinámicas rurales y urbano-rurales, en un contexto en que la ruralidad, tanto en Chile como en el continente y en el mundo, ha cambiado de forma importante en el último tiempo. La ruralidad, como lo señalan varixs autorxs en esta publicación, ha dejado de ser aquel conjunto de relaciones sociales, económicas y culturales nucleadas en torno a las actividades estrictamente agrarias, para reconocer, y esto lo argumentamos nosotros, otro tipo de dinámicas, algunas fuertemente conectadas con la cultura, el patrimonio y la diversidad biocultural de las comunidades, involucrando intensiva y especialmente a mujeres y jóvenes en prácticas asociadas a una agricultura sostenible, la preservación y promoción del patrimonio cultural, iniciativas de protección y defensa ambientales, economías de circuitos cortos, estrategias de turismo rural comunitario, entre otras.

Desde nuestro punto de vista, la experiencia del mundo y la cultura rural, entendidos más que como noción sociológica o variable de política pública, como continuidad de saberes y prácticas porosas al intercambio, las transformaciones, los conflictos y las innovaciones, requiere

atención no solo para abordar sus históricas y actuales exclusiones y desigualdades, sino porque al mismo tiempo, y estamos convencidos de ello, puede ofrecer generosamente perspectivas y aprendizajes para abordar desafíos epocales y transitar a modelos de vida más justos y sostenibles; potencial, por otra parte, que puede productivizarse aún más sobre la base de dinámicas de sinergia, diálogo y reciprocidad a partir de la dualidad urbano-rural, que nunca ha sido binaria o dicotómica, animando vínculos entre actores e iniciativas de espacios urbanos, urbano-rurales y rurales, con objetivos de experimentación, fortalecimiento de capacidades y sostenibilidad territorial.

En este último sentido, vale la pena detenerse en un enfoque que inspira buena parte de los aportes recibidos y es una idea fuerza señalada en el título del libro. Nos referimos al enfoque biocultural, perspectiva que reconoce la continua interdependencia entre la diversidad biológica y la diversidad cultural, afirmando que no hay territorio sin cultura, ni cultura sin territorio.

Nociones como las de patrimonio biocultural, entendido como el complejo biológico-cultural originado históricamente y que es producto de los miles de años de interacción entre las culturas y sus ambientes naturales (Toledo y Barrera-Bassols, 2008), y otras como las de paisaje cultural, entendido como aquellos lugares “que combinan el trabajo de la naturaleza y del hombre [...] ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y del uso del espacio a lo largo del tiempo, bajo la influencia de limitaciones físicas y/o oportunidades presentadas por el medioambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas” (Comité del Patrimonio Mundial de Unesco, 1972 y 1992, cit. en Cabeza, Danilo y Weber, 2011,

p. 426), expresan, cada una con sus acentos por cierto, un nuevo marco de comprensión para aproximarse a una idea de sostenibilidad de los territorios en sentido fuerte, pues supone la consideración de un conjunto de elementos naturales, sociales, culturales y políticos interrelacionados que dibujan una aproximación a los territorios sustentada en la idea de complejidad (Leff, 2004), prisma ineludible en nuestra opinión para imaginar y viabilizar futuros rurales ecosocialmente justos.

El devenir de los territorios rurales y sus comunidades, dicho lo anterior, es evidentemente reactivo a análisis sectoriales o disciplinares, primero porque perspectivas compartimentadas suelen vehicular discursos muchas veces representativos de estructuras de poder no descentralizadas, generalmente provenientes de territorios urbanos capitales, sin diálogo con actores locales, y en segundo lugar, y más importante, porque dichas miradas descuidan epistémicamente el carácter relacional de la vida en todos sus niveles y dimensiones. Animados por este razonamiento hemos convocado a participar de este libro a investigadorxs, artistas, gestorxs y actores públicos interesadxs en reflexionar sobre los cambios, desafíos, conflictos y esperanzas que anidan en el espacio rural, cada uno de ellos desde quehaceres y experiencias muy diversas, obteniendo como resultado un libro cohesionado por esa problematización común y al mismo tiempo muy dinámico en términos de abordajes, lecturas cruzadas, conexiones improbables, e incluso también posibles zonas de fricción. Si se observa el conjunto de artículos como una conversación entre instituciones, colectivos y autores provenientes de distintos países, disciplinas y experiencias, emerge una cierta narrativa acerca de las ruralidades contemporáneas en Ameroibérica, con algunos consensos, matices, líneas de fuga y debates abiertos.

Uno de los elementos transversales más evidentes es, como ya lo adelantamos, el cuestionamiento a las visiones tradicionales predominantes en el siglo XX que han definido la ruralidad exclusivamente a partir de la agricultura, la dispersión poblacional o la distancia respecto de las ciudades. Lxs distintxs autorxs coinciden en que los territorios rurales actuales son espacios altamente complejos, atravesados por dinámicas culturales, ambientales, económicas y políticas que desafían las categorías sectoriales convencionales. La ruralidad deja de aparecer como una condición residual o como una etapa previa al desarrollo urbano y pasa a ser entendida como una realidad diversa y en permanente transformación. Desde Cataluña hasta Bogotá, desde Ayacucho hasta la Región de Valparaíso en Chile, los artículos muestran territorios donde conviven tradición e innovación, memoria y experimentación, saberes ancestrales y nuevos procesos de creación colectiva.

Esta relectura de la ruralidad está estrechamente vinculada con la crítica a un reciente aunque persistente urbanocentrismo. Muchos de los textos sugieren que las formas dominantes de pensar el desarrollo territorial, la cultura o la creatividad han sido construidas desde grandes centros urbanos que vienen interpretando los territorios rurales como periferias subordinadas, espacios vacíos o simples receptores de políticas diseñadas desde otros lugares. Frente a ello, las y los autores reivindican la capacidad de los territorios rurales para producir conocimiento, cultura y formas propias de organización social, junto con la enorme potencialidad de generar respuestas originales a problemas contemporáneos.

En este contexto, la cultura asoma como una dimensión estructurante y basal, constitutiva de la vida territorial. Los distintos aportes

son contundentes en dar cuenta que las prácticas culturales permiten sostener vínculos comunitarios, transmitir conocimientos, fortalecer identidades, construir gobernanza y proyectar futuros compartidos. Un segundo hilo conductor que emerge en esta línea es la revalorización de los saberes territoriales. Las experiencias presentadas coinciden en cuestionar las jerarquías epistémicas que sitúan a los saberes producidos por las comunidades en situación de subordinación respecto del conocimiento experto. Ya sea en los Núcleos de Aprendizaje Participativo de Valparaíso, en la panadería ayacuchana, en las artesanías de Tlaxcala o en las iniciativas rurales de Navarra, aparece la convicción de que los conocimientos ancestrales, campesinos, comunitarios y ecológicos constituyen formas legítimas y valiosas de comprender el mundo. Más aún, varias autoras y autores sostienen que estos saberes resultan indispensables para enfrentar desafíos tan relevantes como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, o la fragilidad de los sistemas alimentarios.

La noción de participación constituye otro punto de cruce relevante entre las y los participantes de esta publicación. Casi todas las experiencias descritas se sustentan en formas de diálogo, co-creación y gobernanza compartida. Los territorios rurales son presentados como espacios donde las soluciones más duraderas emergen de la colaboración entre comunidades, organizaciones sociales, instituciones públicas y actores culturales. En este sentido, la participación no se concibe únicamente como una metodología de trabajo, sino como una dimensión política que posibilita el reconocimiento de derechos, la actualización de una efectiva democracia cultural y la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio futuro.

Sin embargo, esta convergencia no implica uniformidad. Los textos también expresan diferencias importantes respecto de los caminos para construir esos futuros rurales más justos y sostenibles. Algunos autorxs ponen el énfasis en la institucionalidad, las políticas públicas y los derechos culturales, mientras otros privilegian las prácticas comunitarias, los procesos de aprendizaje colectivo o las formas autónomas de organización territorial. Del mismo modo, existen perspectivas que observan en las economías creativas o el turismo cultural una oportunidad para fortalecer los territorios rurales, mientras otras advierten sobre los riesgos de mercantilización, turistificación o pérdida de autonomía que pueden acompañar estos procesos.

Otra interesante dualidad que presenta el libro tiene que ver con la concepción de las ruralidades como espacios desde donde imaginar futuros más sostenibles, relacionales y ecológicamente armónicos. No obstante, varios autores nos recuerdan que estos territorios también están marcados por abandono estatal, precariedad, despoblamiento, baja conectividad, desigualdad de género, fragilidad institucional y despojo. La fricción es productiva: la ruralidad no debe ser reducida, dicotomizada o idealizada. Su potencia política proviene precisamente de su complejidad y diversidad.

Y como siempre suele suceder, uno de los aportes más relevantes del presente libro es que, leído en conjunto, no entrega respuestas definitivas o soluciones clausuradas, sino que abre una serie de preguntas estratégicas para pensar las ruralidades contemporáneas. Varias de ellas atraviesan los artículos aunque no siempre sean formuladas explícitamente: ¿Cómo colaborar en procesos de transformación social,

cultural y económica aprovechando los saberes, prácticas, vínculos e identidades que constituyen la riqueza de los territorios rurales? ¿Cómo contribuir a fortalecer las capacidades de las comunidades rurales para definir sus propios horizontes de buen vivir? ¿Cómo apoyar la activación del potencial cultural, social, económico y creativo de los territorios rurales sin reproducir nuevas formas de extractivismo? ¿Cómo construir futuros rurales donde la experimentación, la sostenibilidad y el bienestar no dependan de abandonar aquello que históricamente ha permitido sostener la vida: los vínculos comunitarios, los saberes territoriales, la diversidad biocultural y las múltiples formas de cuidado que persisten en los territorios rurales?

Bibliografía

- Cabeza, A., Mireya, D. y Weber, C. (2011). Los paisajes culturales en Chile y sus desafíos. En *Patrimonio Turístico en Iberoamérica. Experiencias de investigación, desarrollo e innovación* (pp. 424-433). Ediciones Universidad Central.
- Escobar, A., Osterweil, M. y Sharma, K. (2024). *Relacionalidad: Una política emergente de la vida más allá de lo humano*. Tinta Limón.
- Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XXI Editores.
- Toledo, V. M., Barrera-Bassols, N. y Boege, E. (2019). *¿Qué es la diversidad biocultural?* Universidad Nacional Autónoma de México.

REPENSAR
LAS RURALIDADES



Conceptualizando el espacio de acción de la nueva ruralidad: institucionalidad formal, informalidad e ilegalidad

Rodrigo Yáñez Rojas y Valentina Fuentes Cerda

Introducción

La definición de ruralidad tiende a asociarse al mundo agrícola, la tradición y lo exótico, el pasado y la desconexión. Lo rural se ha concebido históricamente en oposición a lo urbano, cuna de la industrialización y el desarrollo. Sin embargo, desde fines del siglo XX, en vinculación a la aceleración de la movilidad de las personas, los bienes y las comunicaciones, la evolución de la institucionalidad estatal y la extensión de los servicios, así como la extensión de nuevos usos de la tierra y la diversificación de empleos, se comenzó a discutir la actualidad de esa noción tradicionalista de ruralidad. La síntesis de esa reflexión es la emergencia de la noción de *nueva ruralidad* (Gaudin, 2023), que conecta ese espacio antes entendido como aislado, ahora en conexión al mundo global y, por lo tanto, con una identidad cada vez menos definida por el mundo agrícola y la oposición con su par urbano (Berdegué, 2019).

La nueva ruralidad representa un cambio de época, otro orden productivo y social en el espacio rural marcado por desafíos que han ido identificando distintas agendas de desarrollo. Se destaca, por ejemplo,

la importancia de generar estrategias multisectoriales de escala territorial que permitan acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Para ello, se hace vital fortalecer los mecanismos de coordinación entre actores y niveles de acción del sector público, privado y la sociedad civil (Berdegué *et al.*, 2020). Voces más críticas aterrizan los desafíos en la participación local, fortaleciendo la agricultura campesina e indígena antes que la acción de agentes externos (Ramírez-Miranda, 2014).

Otros estudios, capturando aspectos subjetivos en distintos territorios rurales latinoamericanos, fijan los desafíos en algunas dimensiones clásicas del desarrollo, como aquellas vinculadas a las transformaciones del empleo, la infraestructura y el acceso a servicios, con otras que han ido adquiriendo más espacio en la discusión de la nueva ruralidad, por ejemplo, dimensiones vinculadas a brechas en la conservación de los ecosistemas, la igualdad de género, el espacio de la juventud en la proyección de la ruralidad y las disputas en torno al reconocimiento y la igualdad de trato (Yáñez, 2024). Elementos que se repiten en las agendas más recientes, donde se sistematizan aquellos aspectos que condicionan los rezagos persistentes en el bienestar de la población rural, las desigualdades de género y etnia, los conflictos en el uso de la tierra y la sostenibilidad, así como las deficiencias en las capacidades institucionales y un aumento de la presencia del crimen organizado (CAF, 2026).

Todos estos desafíos que describen las necesidades de la nueva ruralidad se van entrelazando y describen una sociedad que ya no está enclaustrada únicamente en la agricultura y la tradición. En este marco, se observa la ruptura de un orden y, así como las preguntas

sociológicas en su origen se ocuparon por entender las transformaciones sociales impulsadas por la industrialización, buscando estudiar la manera como se erigía un nuevo orden social (Durkheim, 2019), al analizar la nueva ruralidad podemos encontrar preguntas similares. ¿Qué implican estas brechas que se van listando desde distintos sectores en la acción de las personas que habitan los territorios rurales? ¿Cómo se estructura un nuevo orden social en la ruralidad?

Fijando la mirada en las agendas antes descritas, una forma de responder a estas preguntas es analizando las brechas que perfilan los desafíos del desarrollo rural. Estas dimensiones pueden ir ganando amplitud como crecer en especificidad, dependiendo de la interpretación de los interesados y el foco dónde se quiere acentuar las acciones de cambio. Dicho de otra forma, podemos seguir hablando de educación con pertinencia, acceso a salud, infraestructura, entre otros. Sin embargo, hay un aspecto que cruza estas brechas y está más bien ausente en el debate sobre los desafíos de la nueva ruralidad, y es el espacio de acción donde se despliegan los actores rurales en su vida cotidiana. Este espacio responde al entendimiento del nuevo orden social propiamente tal, muy vinculado a la interpretación de las normas y las reglas que organizan este mundo en transformación. Focalizar este problema resulta crucial, porque permite abordar las brechas de desarrollo en la nueva ruralidad desde una perspectiva empírica.

Un estudio sobre la interpretación de las normas en América Latina (Araujo, 2009) entrega luces para ingresar a este problema. Volviendo sobre una frase que se remonta al periodo colonial, *se acata, pero no se cumple*, diversos autores reflexionan sobre la conflictiva relación de la región con la ley y la constante trasgresión a la norma en la vida

cotidiana de los sujetos. Fuertemente vinculado a los procesos dictatoriales y democratizadores recientes, existe en nuestros países un fuerte apego a las normas y reglas, al menos en términos formales, en la medida que estas buscan limitar los actos de violencia y regular los abusos en la vida cotidiana. Sin embargo, lo que parece funcionar formalmente, está atravesado por interpretaciones que transgreden esos marcos y van configurando acciones cotidianas en los márgenes o fuera de él, como actos de informalidad, acuerdos implícitos e incluso actos de corrupción.

En este espacio de acción transitan los individuos constantemente, entre la formalidad y el margen. Un espacio que no es simplemente jurídico, también incluye la vida social y permite entender cómo se estructura la nueva ruralidad. En términos concretos, este espacio de acción se puede sistematizar en la interacción de tres dimensiones que aparecen recurrentemente en la vida social rural: la institucionalidad formal, la informalidad y la ilegalidad.

Las tres dimensiones que determinan el campo de acción de los agentes están condicionadas en gran medida por las actividades productivas que estos realizan, pero trasciende el campo económico, cubriendo también el campo de acción de su vida social. Definir este espacio es necesario porque las estrategias de desarrollo identificadas necesariamente se ejecutan en la interacción de estas dimensiones y, muchas veces, si bien los diagnósticos en cuanto a brechas de la nueva ruralidad pueden estar ajustados, al no considerar el espacio en que se despliegan las acciones, puede debilitarse la solución identificada como correcta.

La primera dimensión, de la institucionalidad formal, refiere a la relación que establecen los actores con el Estado, lo que implica su

participación en distintos tipos de programas públicos, principalmente en el ámbito del fomento productivo, en los cuales hay regulaciones, impuestos, seguridad social y una serie de formalidades asociadas. Esta dimensión también aborda la relación con los programas, por ejemplo, de salud y educación que implican la formalización de acuerdos, presentar papeles, estar al día con requerimientos consagrados por la contraloría. En otras palabras, es un ámbito de acción regulada, donde hay registros y donde se debe cumplir con todos los marcos legales.

Una segunda dimensión es la informalidad, la que identifica las relaciones que se despliegan al margen del marco legal de cada país. En la nueva ruralidad esta dimensión se vincula a la evasión de registros, venta de bienes que no cumplen con todos los estándares establecidos o las regulaciones laborales que se requieren formalizar para estar al día. A menudo, este tipo de acciones no se realizan debido a los costos que implica regularizar algún tipo de actividad o vínculo, lo que refleja de otra forma la precariedad laboral que sostiene también los empleos que se generan. Y, si bien este ámbito describe actividades que se desarrollan por fuera de la ley, estas no son ilegales y pueden conectar con la formalidad a través de una serie de incentivos económicos y políticas públicas.

Una tercera dimensión es la ilegalidad, muy cercana de la informalidad, puesto que agrupa una serie de actividades que carecen de registro, pero no se pueden entender como sinónimos. La ilegalidad opera fuera del marco legal y se vincula directamente a actividades ilícitas, transacciones prohibidas y encubiertas, como aquellas derivadas del contrabando y el crimen organizado. Por definición, este

tipo de actividades están prohibidas por ley y no existen canales a través de los cuales podrían formalizarse sin un cambio a nivel legal o constitucional.

Cada una de las dimensiones representa una serie de actividades que a continuación se discuten a través de ejemplos. Nombrar las dimensiones es importante para poder establecer medidas de acción que permitan generar diálogos entre esos mundos para abordar las brechas identificadas. Hablar de este campo de acción no implica estigmatizar a la población rural como cercana de lo ilegal, de hecho, las tres dimensiones también operan a nivel urbano. La idea es entender que parte del dinamismo de la nueva ruralidad implica este tránsito cotidiano de las personas entre una y otra dimensión. No visualizar este espacio implica limitar la transformación para mejorar las condiciones de vida de la población rural contemporánea, porque las propias herramientas del Estado y la inversión privada chocan frente a esta realidad y sus tabúes: aquello que se ve pero no se nombra y, por lo tanto, no se entiende cómo tratar.

A continuación, se perfilan ejemplos de los desafíos vinculados a cada una de las dimensiones donde se despliega la acción social de la nueva ruralidad.

Tres dimensiones en disputa

Institucionalidad formal

La institucionalidad formal no está exenta de desafíos. Incluso si los sujetos rurales se vinculan de manera permanente bajo las reglas que indican los protocolos establecidos por el Estado, hay una serie de prácticas

que están vinculadas directamente a la institucionalidad formal pero que no son reconocidas, o se relacionan de manera tensa con ella.

Un ejemplo es la forma de hacer política que expresan poblaciones como los pueblos indígenas. En el trabajo con comunidades indígenas de distintos pueblos de América Latina, se observa que hay una tensión en la relación que se establece en el choque de cosmovisiones y el no reconocimiento de las formas en que los pueblos indígenas construyen y organizan su sociedad (Yáñez, 2025). Esta diversidad de perspectivas cristaliza tipos de mundo en disputa (Descola, 2025), que no están abiertamente reconocidos, como la elección de autoridades locales, el rol de los consejos de autoridades ancestrales, los ritos vinculados a los ciclos productivos, las formas de aplicar las leyes, formas de abordar la salud, entre muchos otros elementos. Al no integrarse dentro de la institucionalidad formal, estas formas sociales excluidas van generando irritaciones al sistema social y, con ello, se desvanece una base para construir un diálogo político que genere canales de comunicación y entendimiento entre pueblos.

Observando el espacio de los pueblos indígenas en las sociedades latinoamericanas, hay interpretaciones de lo que es “justo” que pueden multiplicarse y complejizarse en versiones ancladas en un perspectivismo indígena (Viveiros de Castro, 2021), donde los sujetos que disputan un horizonte de justicia pueden ir más allá de lo humano. Estudios han analizado este proceso para el caso andino en Perú, indicando que en disputas mineras las alianzas se pueden organizar en torno al ayllu, un espacio dinámico compuesto por una comunidad de seres que existen en el mundo incluyendo, por ejemplo, a los humanos, las plantas, los animales, los ríos, la lluvia y las montañas (De la Cadena, 2015). Desde

este principio, lo justo involucra el derecho y la perspectiva de todos estos actores. El opuesto de esta tensión se puede ver en la Constitución de Ecuador, que reconoce formalmente a la naturaleza o Pachamama como sujeto de derechos, y desde ahí construye un diálogo entre iguales en el ámbito institucional. Incluso en este caso, la ejecución de la norma es un desafío siempre presente, pero formalmente la diferencia de mundos se reduce en comparación a otros países.

Otro ejemplo que puede ilustrar la tensión por el reconocimiento en la dimensión de la institucionalidad formal es la discusión sobre las demandas de igualdad de género que atraviesan la nueva ruralidad. Hay una demanda por mejores condiciones y equidad en el trabajo, en el espacio doméstico y una alerta frente a las condiciones de violencia (Yáñez, 2024). Este es un proceso en curso y se manifiesta en brechas de género significativas en el acceso y control de recursos agrícolas esenciales, como la tierra, el agua, la tecnología o la capacitación, que afecta principalmente a las mujeres rurales (Valdés y Willson, 2013). Estas brechas persisten en un marco donde las políticas de desarrollo, pese a buscar la autonomía económica de las mujeres, las mantienen vinculadas a labores socialmente relegadas como el cuidado o la pequeña producción. Al encuadrar estas tareas dentro de una lógica de “ayuda” en lugar de componentes centrales de la estructura productiva, la institucionalidad formal desplaza a las mujeres y termina reproduciendo las mismas desigualdades que intenta combatir al no integrarlas. Esta situación se vuelve más crítica al considerar factores interseccionales como la edad, la pobreza, la pertenencia étnico-racial o la discapacidad, lo que agudiza la demanda vinculada al reconocimiento que debe hacer la institucionalidad formal para que la nueva ruralidad integre su diversidad.

Informalidad

De acuerdo con datos recientes, en América Latina cerca del 67% del empleo rural es informal y las brechas salariales frente a las zonas urbanas persisten (CAF, 2026). La informalidad cubre una amplia mayoría del trabajo rural y esto se observa, por ejemplo, en la cantidad de empleo que no utiliza factura o boleta, y no paga impuestos. También en la no adquisición de certificaciones que permiten la venta de productos, como resoluciones sanitarias, o el distinto nivel de bancarización que pueden tener las familias. Todos estos elementos sitúan a los individuos en un espacio distinto del formal, a pesar de poder estar, al mismo tiempo, en un diálogo con la institucionalidad mediante la participación de algún miembro del hogar en el sistema educativo o a través de las visitas a recintos médicos asociadas a registros oficiales.

La informalidad forma parte de la ruralidad. En un estudio reciente se analizó la emergencia de clústeres territoriales vinculados a cadenas hortícolas en Asia y África. Estos son conglomerados en lugares geográficos específicos donde existe una alta concentración y actividad económica de pequeños productores comerciales y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) agroalimentarias. Debido a la alta densidad de actores se crean vínculos estrechos dentro de las cadenas de valor local que permiten un dinamismo económico que incluye a la población generando empleo en la producción agrícola y comercial (Trivelli *et al.*, 2026). La mayoría de estos clústeres analizados en Kenia y Odisha son espontáneos, es decir, poseen un carácter informal en la medida que emergen en la concertación de actores por fuera de las regulaciones y estándares de un proceso guiado por una política pública. De hecho, estos clústeres no fueron establecidos directamente por un

gobierno, una gran empresa u organizaciones de la sociedad civil. Y, aunque existen clústeres organizados por políticas públicas, como los de Producción Agrícola establecidos en el Estado de Odisha en India en 2018, diseñados para fomentar el cultivo comercial de vegetales en áreas marginadas y tribales mediante la capacitación y la asociación de los agricultores, el común denominador del dinamismo rural está en la baja regulación y alta flexibilidad de normas.

Algo similar ocurre con el crecimiento de la minería informal a propósito de la transición energética actualmente en curso. Los minerales necesarios para la transición energética presentan una baja sustituibilidad y una alta concentración geográfica de oferta, lo que tensiona los procesos de extracción, procesamiento y comercialización. En este contexto, se observa que las cadenas de suministro se exponen a diversas externalidades negativas, como la amplificación de las dinámicas de informalidad ya existentes en los territorios rurales, las que se cruzan con fenómenos de ilegalidad, violencia y vulneración de derechos (UNODC, 2025a).

Frente a este fenómeno de precarización del desarrollo, que presiona a los ecosistemas y el bienestar de la calidad de los territorios rurales, los marcos internacionales destacan que hablar de una transición energética justa requiere abordar la informalidad del sector. Esto implica orientar a las industrias hacia el diálogo social para garantizar el trabajo decente e inclusivo, generar salvaguardas ambientales, integrar a las comunidades locales y respetar los derechos de la población donde se desarrolla esta industria, con especial atención a los pueblos indígenas (ILO, 2016; UN, 2024). Para alcanzar este objetivo, una estrategia es avanzar en la formalización de la actividad minera a través

de la reducción de la burocracia excesiva, los altos costos de licencias y las barreras legales y administrativas que, en la práctica, excluyen a parte de los actores involucrados e impiden transitar hacia esquemas regulados (Hilson *et al.*, 2017; World Bank, 2023, 2024). Asimismo, se ha avanzado en el uso de tecnología y modelos de trazabilidad de minerales, pues se requiere de información para rastrear el origen, trayectoria y cambio de propiedad de los minerales a lo largo de la cadena, porque hoy mucha de la producción circulante proviene de fuentes informales. Este tipo de medidas facilita la evaluación del impacto de la industria y contribuye a mejorar el acceso a mercados regulados que fomentan una mayor formalidad del sector (IEA y OECD, 2025).

Ilegalidad

La tercera dimensión del campo de acción es la ilegalidad. Como señala un reporte reciente, en la nueva ruralidad se observan débiles niveles de gobernanza y presencia institucional, lo que está aparejado a una creciente expansión de economías ilegales (CAF, 2026).

Existen distintos niveles de ilegalidad vinculados a mayores o menores niveles de violencia. Por ejemplo, asociado a zonas aisladas y territorios fronterizos, aparecen prácticas como la venta ilegal de combustible o el contrabando, que operan fuera del marco legal pero se integran en la cotidianidad como un mecanismo de subsistencia ante las dificultades logísticas. Debido a que la intervención de los servicios públicos suele ser limitada o reactiva en estos contextos de aislamiento, estas economías ilícitas tienden a llenar los vacíos de provisión que el sistema formal no logra cubrir. Así el tránsito cotidiano entre lo institucional y lo ilegal no responde necesariamente a un motivo “delictual”, sino a la

realidad de una nueva ruralidad donde la transgresión de la legalidad se convierte en un recurso frente a las brechas de conectividad y bienestar que persisten en los márgenes del Estado.

Otros casos recurrentes en la región aumentan su complejidad y con ello la vulneración de los derechos de las personas, al mismo tiempo que incrementan los niveles de violencia y el deterioro del tejido social. Por ejemplo, la extracción y el comercio de minerales críticos, antes mencionada, que emplea a millones de personas a nivel global y principalmente en países en desarrollo. Como señalan los estudios, aunque esta actividad impulsa a las economías rurales, a menudo opera en la informalidad y la ilegalidad, enfrentando desafíos en materia de seguridad y salud, así como en la generación de impactos significativos en los ecosistemas (IGF, 2017). La evidencia derivada de la minería informal del oro muestra que la falta de control a este sector facilita flujos financieros ilícitos y daños ambientales severos, incluyendo el uso de químicos prohibidos, lo que refuerza la urgencia de fortalecer mecanismos de regulación y control en el marco de una transición energética sostenible (UNODC, 2025b). Asimismo, en zonas de conflicto, la minería en territorios rurales contribuye directa o indirectamente a la violación de derechos humanos o al financiamiento de grupos armados (OECD, 2016).

La alta demanda del mercado de minerales a nivel mundial empuja a poblaciones que habitan territorios rurales con altas vulnerabilidades sociales a incorporarse a dinámicas económicas que permiten mejorar en el corto plazo sus oportunidades de vida. En ausencia de alternativas productivas viables, resulta poco probable que estos actores abandonen dichas actividades; al contrario, se puede prever un crecimiento.